Peligrosas contradicciones

Consuelo Ordóñez
Presidenta de COVITE

Este año se han cumplido cinco años desde que ETA dijo que no volvería a asesinar. Desde entonces, las amenazas a la que se enfrenta nuestro país han cambiado, se han transformado. Hoy no nos asesinan, pero también hoy el blanqueamiento del terrorismo está más cerca que nunca. Y está más cerca que nunca tanto por mérito de los fanáticos como por demérito de quienes deberían alzar la voz. En este punto, no hago referencia únicamente a actores políticos.

Este año COVITE entregó su XV Premio Internacional a los allegados de Jaime Perdomo, soldado del Ejército colombiano asesinado en mayo de este año por las mal llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo terrorista que ha practicado el asesinato selectivo, que ha violado, secuestrado y que ha ejercido como cártel de la droga.

Colombia habló el pasado 3 de octubre diciendo "no" a un acuerdo cocinado entre el Gobierno colombiano y una organización terrorista. Los acuerdos rechazados en las urnas estipulan que quienes hayan cometido delitos de sangre no pisarán prisión alguna si confiesan los crímenes. En segundo lugar, lo pactado establece que el grupo terrorista tendrá asegurada su presencia en el Senado y en el Congreso en las elecciones de 2018 y en las de 2022. Según el nuevo acuerdo publicitado poco después, los peores criminales de Colombia seguirán sin ir a la cárcel. También según el acuerdo, los peores criminales de Colombia podrán convertirse en distinguidos miembros de las más altas instituciones del país: el Congreso y el Senado.

Los dirigentes de las FARC, así como sus negociadores, siguen encuadrando su macabra actividad terrorista en el marco de la lucha revolucionaria. Las FARC y sus acólitos, como ETA y la izquierda abertzale, presentan el terrorismo como una herramienta honorable y justificable. Por eso llama la atención que partidos políticos españoles y hasta el Gobierno de España se coloque en Colombia del lado de la indignidad e impunidad, dando pie a peligrosas contradicciones que dan alas a los amigos del tiro en la nuca y la serpiente.

El blanqueamiento del terrorismo es una lacra que ataca a las sociedades, sobre todo, en contextos post terroristas. En esto está hoy Colombia y esto es lo que está sucediendo hoy en el País Vasco y Navarra. En plena lucha internacional contra la radicalización violenta, el País Vasco y Navarra son ya espacios de impunidad en los que el culto al asesino no es excepción, sino norma. Allí, recibir a quienes llevan las manos manchadas de sangre es un orgullo para ancianos, adultos y niños. Allí, las políticas públicas de memoria promovidas por Gobierno vasco y navarro se alinean con la vara de la teoría del conflicto; esa que establece que el Estado y ETA ejercieron, los dos, una violencia ilegítima y sistemática.

Nuestra responsabilidad, no como víctimas, sino como ciudadanos libres, no debe limitarse únicamente al derecho a la queja. Debemos algo más a las generaciones que, legítimamente, preguntarán por qué a los más sangrientos criminales de nuestro país se les abrieron las puertas de nuestras instituciones democráticas, por qué nos abrazamos con Gobiernos autonómicos que critican la detención de criminales en busca y captura.

Del mismo modo que defender la Justicia en España y la impunidad en Colombia es incompatible, también lo es defender la lucha contra la radicalización yihadista en España y hacer la vista gorda con la radicalización etnonacionalista de ETA en el País Vasco y Navarra.

Esto dice el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta elaborado por el Ministerio del Interior: "El municipio es el escenario principal de actuación de este fenómeno". Ante esto, yo pregunto: ¿dónde está la actuación del Estado de derecho ante los continuos homenajes a ETA? ¿Dónde están las acciones encaminadas a acabar con el culto al asesino? Si bien no encontramos respuestas a estas preguntas, sí tenemos claro cuál es uno de los mayores peligros a los que hoy nos enfrentamos. Aunque nos pese, ese peligro se llama Partido Nacionalista Vasco y es hoy un actor fundamental en la promoción de la teoría del conflicto, en el blanqueamiento de la violencia terrorista de ETA y en la promoción del discurso que se opone al arresto de terroristas.

Es el Gobierno vasco el que promueve políticas de memoria que equiparan asesinatos terroristas a abusos policiales. Es el Gobierno vasco el que pone objeciones a la detención de etarras en busca y captura. Es el Gobierno vasco el que permite que quienes justifican el asesinato selectivo no condenen el terrorismo e insulten a las víctimas participando en cínicos homenajes. Es el Gobierno vasco el que permite las campañas de acoso contra las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En un mundo globalizado y con la amenaza del terrorismo internacional sobre la mesa, el discurso de los demócratas no puede tener aristas, no puede albergar contradicciones. Una Memoria pública que deslegitime el terrorismo no se construye con homenajes aislados o renombrando plazas. Se construye promoviendo un relato serio y sólido. Aquí y también fuera de nuestras fronteras.